

“ LOS MOLINOS – BUENAVISTA “

Consorcio Urbanístico

ACLARACIONES DE CARÁCTER VINCULANTE AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA CONEXIÓN VIARIA NORTE DEL PP-03, BUENAVISTA, Y DE LA REMODELACIÓN DE LA CARRETERA M-406 ENTRE LA GLORIETA DE CONEXIÓN CON LA CALLE EDUARDO TORROJA DE LEGANÉS Y LA AUTOVÍA A-42, EXPEDIENTE MBV_2022_CO_01

De conformidad con lo previsto en la cláusula 10, párrafo 3º, del pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de las obras definidas en el proyecto constructivo denominado «Proyecto constructivo de la conexión viaria norte del PP-03, Buenavista, y de la remodelación de la carretera M-406 entre la glorieta de conexión con la calle Eduardo Torroja de Leganés y la autovía A-42», en los términos municipales de Leganés y Getafe (Madrid), en relación con lo dispuesto en el artículo 138.3, párrafo 2º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y una vez concluido el plazo legal para que las personas interesadas en la licitación solicitaran aclaraciones a lo establecido en el pliego y su documentación complementaria, procede hacer públicas en el perfil de contratante del Consorcio Urbanístico “Los Molinos – Buenavista”, alojado en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, las correspondientes aclaraciones de carácter vinculante, en los siguientes términos:

I.- Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. Acreditación de la aptitud para contratar del licitador que se apoye para integrar su solvencia en las capacidades de otras personas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, el licitador podrá acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, siempre que demuestre que dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incurso en prohibición de contratar. Este precepto legal recoge el derecho de los operadores económicos de integrar su solvencia acudiendo a las capacidades y medios de terceros, que se reconoce explícitamente en el artículo 63 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. En la directiva se prevé para el caso de que se trata que el documento europeo único de contratación contenga información relativa a ausencia de prohibiciones para contratar y posesión de la habilitación para ejercer la actividad, la solvencia económica y financiera y la capacidad técnica y profesional por parte de las entidades a las que recurra el licitador (artículo 59.1), y se mandata al poder adjudicador para que compruebe que tales entidades cumplan los criterios de selección pertinentes y no estén incurso en algún motivo de exclusión, y para que exija en caso contrario su sustitución (artículo 63.1, párrafos 2º y 3º). La preceptiva transposición al ordenamiento interno de esa directiva europea se ha llevado a cabo mediante la Ley de Contratos del Sector Público, la cual, en aplicación de estas reglas, prevé en su artículo 75.2 que el licitador que haya presentado la mejor oferta deba aportar compromiso escrito de dichas entidades que demuestre que va a disponer de los recursos necesarios. De este modo, el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación prevé en la cláusula 12, apartado A.1, párrafo 4º, que si el licitador va a recurrir a capacidades ajenas para integrar su solvencia, debe aportar un documento europeo único de contratación separado de cada una de las entidades a las que recurra, e igualmente prevé

en la cláusula 15.4, párrafo 5º, que se requiera al licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario para que aporte respecto de cada una de las entidades a cuyas capacidades recurra, la documentación acreditativa de la capacidad de obrar (cláusula 15.1), el apoderamiento (cláusula 15.2), el hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (cláusula 15.3) y la solvencia económica, financiera y técnica (cláusula 15.4), así como el compromiso por escrito que demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

En consecuencia, la acreditación de la aptitud para contratar del licitador que se apoye para integrar su solvencia en las capacidades de otras personas requiere la presentación adicional de sendas declaraciones responsables suscritas conforme al documento europeo único de contratación por cada una de las personas a cuyas capacidades recurra, relativas al respectivo cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de adjudicación. Posteriormente, en el caso de que el licitador sea propuesto como adjudicatario, deberá aportar los documentos acreditativos de la identidad, la capacidad de obrar, la representación, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la solvencia de tales personas, así como sendas declaraciones específicas para acreditar la efectiva disposición de las capacidades ajenas. Es decir, en estos supuestos el licitador deberá presentar en relación con cada una de las personas en que tenga intención de apoyarse para integrar su solvencia, los respectivos documentos europeos únicos de contratación (cláusula 12, apartado A.1, párrafo 4º, del pliego), eventualmente acompañados, si se diesen los casos, de sendas declaraciones adicionales de pertenencia a grupo de empresas (cláusula 12.A.4), de sometimiento de extranjeros a la jurisdicción española (cláusula 12.A.5) y de oposición a la consulta electrónica de datos (anexo VII). Igualmente, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, deberá presentar toda la documentación que acredite la aptitud para contratar de dichas personas conforme a los apartados 1 a 4, ambos inclusive, de la cláusula 15, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, más la documentación que acredite que tales personas efectivamente ponen a disposición del licitador sus propias capacidades, mediante sendas declaraciones de compromiso de puesta a disposición del licitador de todos los recursos comprendidos en las capacidades a que este haya recurrido para integrar su solvencia que sean necesarios, siendo los requisitos de esta declaración los comunes a cualquier declaración de voluntad que haya de vincular de forma jurídicamente incondicional a la persona declarante a tenor de los documentos relativos a su identidad, capacidad de obrar y, en su caso, representación.

II.- Cláusula 34. Revisión de precios. Alcance de la mención en el proyecto de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, los valores monetarios en cuya determinación intervenga el sector público no podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan, salvo que, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice reglamentariamente, se apruebe excepcionalmente un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales e índices específicos de precios. En coherencia con estas reglas, la Ley de Contratos del Sector Público establece en sus artículos 103 a 105 el régimen general de la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público, previendo que, si bien los contratos administrativos de obra sean susceptibles de revisión periódica y predeterminada de precios (artículo 103.2, párrafo 1º), la revisión solo tendrá lugar cuando hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, quedando en

consecuencia excluidos de revisión los dos primeros años (artículo 103.5, párrafo 1º). De este modo, puesto que el plazo de ejecución de las obras que son objeto del presente contrato, establecido en la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación en relación con el apartado 18 de la cláusula 1, es de doce meses, el propio pliego prevé en el apartado 25 de la misma cláusula 1, al que remite la cláusula 34 que se glosa, que en el presente contrato no procede la revisión de precios. Sin embargo, el proyecto de las obras establece cautelarmente en el apartado 8.6 de la memoria y en su anejo administrativo número 9 una fórmula de revisión de precios para el caso en que fuera necesaria, lo que podría inducir a interpretar que el contrato está sujeto a revisión de precios con carácter ordinario cuando no es así.

En consecuencia, es preciso aclarar que, conforme a lo dispuesto en el pliego y la normativa que rige la contratación, en el presente contrato no procede revisión de precios con carácter ordinario, sin perjuicio de la eventual aplicación de las previsiones sobre la materia contenidas en el proyecto de las obras para los casos en que fuere necesario, por ejemplo, a los efectos previstos en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, u otros en que legalmente fuere procedente.

III.- Cláusula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. Tasas por dirección de obra.

El pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación dispone en la cláusula 35, párrafo 1º, que sean de cuenta del contratista, entre otros gastos, los de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Entre las tasas de cargo del contratista se incluyen, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. No obstante, en el presente caso el consorcio se hace cargo de la dirección de las obras que son objeto del presente contrato, sin que esté previsto que devengue tasa alguna.

En consecuencia, es preciso aclarar que, conforme a lo dispuesto en el pliego y la normativa que rige la contratación, en el presente contrato no se aplica a la obra tasa alguna por dirección de obra.

IV.- Cláusula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. Cargas asociadas a la autorización administrativa de construcción de la carretera.

El pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación dispone en la cláusula 35, párrafo 1º, que sean de cuenta del contratista, entre otros gastos, los de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan. Dado que las obras que son objeto del presente contrato están sujetas a lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, por cuanto que inciden sobre una carretera integrante de la red viaria autonómica

a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la misma, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se indica, al definir el objeto del contrato (apartado 1 de la cláusula 1), que la obra proyectada consiste básicamente en la construcción de una carretera conforme a las determinaciones del plan urbanístico especial de infraestructuras aprobado por la Comisión de Urbanismo el 21 de octubre de 2014 y las instrucciones de la Dirección General de Carreteras (subapartado II, párrafo 2º). En la normativa de carreteras se dispone que el establecimiento de accesos de cualquier clase en el sistema viario de la Comunidad de Madrid está sujeto a autorización administrativa (artículo 36.1), la cual solo podrá ser concedida si el interesado constituye garantía suficiente para salvaguardar el uso adecuado de las carreteras o garantizar la seguridad vial (artículo 40 bis). Solicitada por el consorcio la preceptiva autorización, con fecha 29 de septiembre de 2022 la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha informado de su concesión, condicionada a que se depositen doscientos mil euros (200.000,00 €) a cargo del contratista ejecutor de las obras en concepto de fianza para garantizar la correcta ejecución de las obras.

A la vista del principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista salvo casos de fuerza mayor que se establece en el artículo 197 de la Ley de Contratos del Sector Público, y considerando que la carga de depósito asociada a la autorización administrativa de construcción de la carretera se inscribe, por su finalidad de garantizar la correcta ejecución de las obras en orden a la salvaguarda del uso adecuado de la carretera y la seguridad vial, en el ámbito de las obligaciones del contratista derivadas del principio de vinculación al contenido contractual del artículo 189 de la ley y, específicamente, de la de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato que se establece con carácter general en el artículo 196.1 de la misma, es preciso aclarar que, conforme a lo dispuesto en el pliego y la normativa de carreteras de aplicación a la ejecución de las obras, son de cuenta del contratista los costes del depósito legalmente necesario para la concesión de la preceptiva autorización de ejecución de las obras, en cuanto que carga del contratista ejecutor de las mismas asociada a la autorización administrativa de construcción de la carretera.

Hágase público para general conocimiento.

En Madrid, a fecha de la firma
El director-gerente del consorcio
(por delegación del órgano de contratación)

Firmado digitalmente por: UCAR ARNEDO - DN [REDACTED] LUIS CARLOS
Fecha: 2023 01 19 14:13

Carlos Ucar Arnedo